

PUEBLO MAPUCHE, ESTADO, ECONOMÍA Y TIERRAS. UN CONFLICTO EN VACA MUERTA: NEUQUEN, 2010-2015

Povo mapuche, estado, economia e terras. Um conflito em 'Vaca Muerta': Neuquen (Argentina), 2010-2015

Carla Sabrina Aguirre

Centro de Estudios Históricos Regionales (CEHIR) -
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas (CONICET) – Universidad Nacional del
Comahue,
Argentina.

Correo electrónico: aguirrecarlasabrina@gmail.com

Informações do artigo

Recebido em: 26/12/2016

Aceito em: 08/05/2017

Resumen

Las relaciones entre las agrupaciones mapuches y el Estado pueden pasar por tres puntos: la colaboración, el diálogo o la confrontación. El tipo de relación posible en el marco de un reclamo se halla afectado por factores, entre los cuales se encuentran las políticas económicas llevadas a cabo en un territorio junto con la forma en que éstas afectan la territorialidad indígena, y los procesos de politización propios de las comunidades. En cuanto a lo primero, en la provincia de Neuquén, el desarrollo de la actividad hidrocarburífera marca el pulso de ciertos conflictos sociales, como en este caso, aquel con el pueblo mapuche. Numerosas comunidades han sido trasladadas, desde el siglo XIX, por agencia del Estado a tierras que en determinada coyuntura histórica no eran de valor reconocido, pero que en el siglo XXI resultan de importancia estratégica para la matriz energética del país y de la provincia. Respecto de lo segundo, al calor de diversos conflictos, ligados a diferentes bienes comunes, excediendo el petróleo y el gas, el pueblo mapuche ha atravesado procesos de auto-reconocimiento, organización y reagrupamiento que en casos implican alineamientos con los gobiernos provinciales o nacionales, divisiones internas, y en otros momentos, el rechazo a la colaboración con los agentes estatales. Nuestro objetivo es analizar las diferentes variables que atravesaron el conflicto específico de la comunidad Campo Maripe con el Estado provincial neuquino, ubicada en el interior neuquino, en la formación Vaca Muerta, a través de testimonios orales y fuentes escritas (documentos elaborados por las partes involucradas, y material de la prensa escrita).

Palabras clave: Pueblo mapuche. Economía petrolera. Territorialidad. Acciones colectivas.

Introducción

Este trabajo es una primera aproximación a un estudio de caso acerca de los conflictos socioambientales protagonizados por la Comunidad Campo Maripe, el estado provincial y agentes económicos privados, en el departamento de Añelo de la provincia de Neuquén. Para ello, el trabajo inicia con una mínima caracterización de algunos actores en juego en el conflicto. Tras ello, aborda una necesaria contextualización del mismo, enmarcándolo dentro de los debates socioambientales dados en las últimas décadas, cuestión que atraviesa a

América Latina toda. Por el otro lado, antes de volcarse al análisis del caso, realiza en un segundo momento un somero repaso de algunos hitos en el proceso de organización política del pueblo mapuche, a fines de caracterizar las acciones colectivas desde un análisis histórico.

Los procesos de politización del pueblo mapuche en Neuquén se encuentran atravesados por múltiples circunstancias históricas, dentro de una trama de relaciones socioeconómicas y culturales compleja cuya situación actual debe ser explicada, por lo menos, desde la provincialización de dicho espacio. La situación histórica de los pueblos originarios sin dudas obedece a raíces históricas decimonónicas, en las cuales se da comienzo a procesos de desposesión, desarticulación de comunidades y núcleos familiares indígenas, y re-localización de comunidades. Los usos que del suelo y los bienes comunes se han pretendido desde la articulación de nuestro modelo económico agroexportador en el siglo XIX han demandado, en la visión de los sucesivos gobiernos nacionales, las operaciones anteriormente mencionadas.

En este sentido, resulta necesario tender puentes para lograr una perspectiva de mayor amplitud en torno a los conflictos específicos del espacio provincial de Neuquén. Las particularidades neuquinas en cuanto a sus gestiones políticas –que desde la década de 1960 han estado marcadas por la primacía en los espacios de poder del Movimiento Popular Neuquino (MPN), el partido en el gobierno provincial— se entrecruzan con los rasgos del modelo económico provincial, fuertemente atravesado por la explotación hidrocarburífera. En cuanto a lo primero, el Movimiento Popular Neuquino (MPN), surgido durante la proscripción del peronismo, en base a redes comerciales, políticas y familiares (Luorno, 2000) supo lanzarse como un partido provincial de núcleo peronista. Discursos ligados al federalismo y planificación de la gestión política en base a etapas necesarias para lograr posicionar a la provincia como un actor fuerte en la escena nacional (Perren, 2007) marcaron una hegemonía dentro de los ámbitos de poder político provincial que el Movimiento Popular Neuquino (MPN) mantiene hasta el presente.

En cuanto a lo segundo, la política económica del Movimiento Popular Neuquino (MPN) ha variado desde fines del siglo pasado al presente. Bajo gobierno de Felipe Sapag, en 1997 se planteaba el Plan “Neuquén 2020”, que entre sus objetivos contaba el reducir la importancia económica de los hidrocarburos, dada una previsión del agotamiento de las reservas petroleras y gasíferas –en ese momento, calculando una vida útil de las explotaciones por dos décadas más –, dando lugar primordial a otras explotaciones, como la

forestal. Sin embargo, la asunción de la gobernación por parte de Jorge Sobisch —quien en la interna del partido encarnaba la posición enfrentada a Sapag— en 1999 significó un nuevo planteo económico, en términos de “alianzas estratégicas”.

Estas “alianzas” implicaron pactos con multinacionales para la explotación petrolera, en el marco de un proceso que hasta el 2008 fue de suba del precio del barril. Los pactos hacia afuera se complementaron, hacia adentro, con un drástico recorte del sector público, entre otras medidas en las que aquí no ahondaremos. Aquel con mayor vigencia ha sido el firmado con Repsol-YPF —que renovaba la concesión de Loma La Lata (pensada en aquel momento hasta el 2017) — el agente actualmente de mayor presencia en las explotaciones hidrocarburíferas de la provincia (Bilder-Giuliani, 2009: 15). Saliendo de los dos ejemplos mencionados de política económica divergente entre la gestión Sapag y la sobischista, tras la crisis económica del 2008, y en sintonía con las decisiones tomadas desde el gobierno nacional kirchnerista, el gobierno provincial optó por trabajar en favor de las renovaciones de los contratos con las empresas petroleras: *“los ingresos adicionales que se obtendrían, sumados a los compromisos de inversiones eran dos cuestiones tentadoras para un gobierno provincial con una alta tasa de conflictividad laboral”* (BILDER-GIULIANI, 2009, p. 15).

En 2009, dos economistas regionales realizaban la siguiente valoración de la actividad petrolera en la provincia, que, exceptuando los cambios ligados a la nacionalización del 51% del capital accionario de YPF (2012), y a la liquidación de los activos en la región de empresas como Apache, sigue siendo suficientemente acertado:

El negocio petrolero en la actualidad presenta interesantes características, si bien las concesionarias de la explotación son las grandes multinacionales, tales como Repsol-YPF, Petrobrás, Total, Chevron, Apache, Pan American Energy y otras menores. Hay además una importante gama de empresas contratistas que están trabajando en los pozos, como las “perforadoras” y las que efectúan los llamados “servicios especiales”. La actividad de perforación no tiene muchos partícipes en el mundo; en Neuquén son dos: Pride y Key. Sus equipos permiten perforar a cualquier profundidad y entre ambas contratan aproximadamente 3.000 empleados. Siguen los trabajos complementarios, que hacen de la perforación inicial un pozo petrolero; las empresas representativas en esta etapa son Schlumberger y Dresser Atlas. Luego siguen otras tareas que son llevadas a cabo por la importante Halliburton, Dowell y otras, obviamente de capitales internacionales. A esto hay que sumarle el trabajo de numerosas empresas locales que realizan los transportes de personal, sistemas sanitarios, alimentos, seguridad, etc. De modo que el negocio petrolero tiene muchas facetas, donde lo habitual es la tercerización de la actividad (BILDER-GIULIANI, 2009, p. 16).

De modo que el desarrollo de la actividad hidrocarburífera marca el territorio de la provincia de Neuquén, y condiciona el pulso de ciertos conflictos sociales, como en este caso, el conflicto con el pueblo mapuche. Dentro de los procesos de desarraigo que mencionábamos más arriba, a numerosas comunidades les ha tocado en suerte ser trasladadas a tierras que en determinada coyuntura histórica no eran de valor reconocido, por ejemplo por su baja fertilidad. Las comunidades se han asentado y han utilizado, desde el siglo XIX, tierras en diversas locaciones que hoy resultan, ellas mismas o sus alrededores, de importancia estratégica para la matriz energética del país y de la provincia. Al calor de diversos conflictos, ligados a diferentes bienes comunes, excediendo el petróleo y el gas, el pueblo mapuche ha atravesado un proceso de auto-reconocimiento y organización.

La década de 1990 trajo novedades en los procesos de politización del pueblo mapuche de Neuquén.¹ Una de ellas fue la adopción de nuevos métodos de lucha, en el contexto de la conformación de organizaciones con novedosos planteos dentro del campo político provincial y nacional: por ejemplo, la Coordinadora de Organizaciones Mapuche y la Confederación Mapuche de Neuquén. En el marco de las relaciones entre el pueblo mapuche y el Estado provincial, la renovación más importante que plantean estos nuevos actores es la voluntad de conformación de una línea política que guarde autonomía respecto de la correspondiente al Movimiento Popular Neuquino (MPN), partido gobernante en la provincia desde la década de 1960.

Las relaciones políticas entre esas agrupaciones que plantean la autonomía del Movimiento Popular Neuquino y el Estado provincial pasan por dos líneas complementarias de acción: el diálogo y la confrontación. Este sector del pueblo mapuche se caracteriza por una abierta interpelación a la Provincia. En un nivel más general, esto indica un cierto cuestionamiento a las relaciones sociales de dominación.

Ambas “líneas de acción” (la confrontación y el diálogo) se han puesto en juego en un conflicto reciente —sin embargo inscripto dentro de un conjunto de reclamos territoriales—. Nos proponemos analizarlas, en el caso específico de la comunidad Campo Maripe, ubicada en el interior neuquino, en el Departamento de Añelo. Esta comunidad se encuentra en un

¹ Para una reconstrucción más amplia de la historia del movimiento mapuche tanto en Chile como en Argentina, es recomendable la lectura de Víctor Toledo Llancaqueo (2005, p. 67-102). Para reconstrucciones del proceso específico en Neuquén, una lectura sintética recomendable es la de VALVERDE, Sebastián, “La historia de las organizaciones etnopolíticas del pueblo mapuche”, *Revista de Historia*, Universidad Nacional del Comahue, Neuquén, 2005.

conflicto por el reconocimiento oficial de las tierras que ocupan y utilizan ancestralmente, ubicadas en el corazón de la formación Vaca Muerta. Por las particularidades que presenta este conflicto, en una locación (Añelo) en la que recientemente se han descubierto potencialidades para la extracción de hidrocarburos, sugerimos colocar este conflicto en particular dentro de una perspectiva más amplia. Ésta nos permitirá observar el caso analizado en el marco de algunos debates en torno a las economías extractivistas. Por el otro lado, resulta necesario repasar las principales características del proceso de politización del pueblo mapuche al que hacemos referencia, para comprender algunos rasgos de las acciones colectivas emprendidas por el lof² Campo Maripe.

Una mirada con perspectiva: el extractivismo y los pueblos americanos

En América Latina, el extractivismo encontró, entre fines del siglo pasado y comienzos del presente, momentos de expansión y auge. El continente asistió a procesos que entrelazaron y entrelazan el extractivismo con el neoliberalismo, a través de la reprimarización económica, los monocultivos, la megaminería y la explotación hidrocarburífera. El capital internacional, los oligopolios ligados a las explotaciones mencionadas, ha sabido obtener el respaldo de gobiernos latinoamericanos de un tiempo a esta parte. En la última década, un discurso nacional-popular ha sido en la práctica articulado con

una política que promueve y convalida la instalación de un modelo neocolonial, basado en la apropiación y destrucción de los recursos naturales. Esto es, más allá de las retóricas industrialistas y emancipatorias en boga, los gobiernos progresistas tienden a aceptar como "destino" el "nuevo consenso internacional", en nombre de las "ventajas comparativas" o de la pura subordinación al orden geopolítico mundial" (SVAMPA, 2011, p. 103).

Con el avance de proyectos políticos de corte neoliberal en los años noventa del siglo pasado, y los ajustes estructurales por ellos perpetrados, se puede señalar que los Estados se desligaron, en ciertos aspectos, del control de los recursos naturales. La privatización de empresas destinadas a explorar y explotar los recursos hidrocarburíferos es sólo un ejemplo que se puede encontrar en Argentina. Andado el tiempo, con la instalación de gobiernos

² *Lof* es el término en mapuzugun (idioma mapuche) para designar a una comunidad.

progresistas en varios países de nuestra región, el extractivismo se afianzó aún más, como apuntábamos más arriba, citando a la socióloga Maristella Svampa.

El modelo económico extractivista implica una estrategia para la acumulación de capital, que se basa en “*la sobre-explotación de recursos naturales, en gran parte, no renovables, así como en la expansión de las fronteras hacia territorios antes considerados como ‘improductivos’*” (SVAMPA, 2011, p. 105). Aunque, en cierto modo, excede a las actividades normalmente relacionadas a la “extracción” de recursos, como el caso del petróleo y el gas: se cuentan como extractivistas también a aquellas actividades que operan con lógicas de monoproducción y generación de enclaves económicos, como las ligadas al agronegocio, y por el otro lado aquellas vinculadas a los programas de generación de infraestructura orientada al facilitación en los procedimientos de extracción, comunicación y traslado de las producciones desde los países productores (como, por ejemplo, el transporte). También puede definirse como la extracción de bienes naturales para su exportación en grandes volúmenes o alta intensidad (GUDYNAS, 2013).

Los conflictos sociales que giran en torno a reivindicaciones ligadas a bienes comunes, frente al modelo extractivo exportador, se han extendido en todo el continente desde el avance neoliberal de los años noventa. Sin embargo, las actividades económicas extractivas no resultan una novedad para tierras como las latinoamericanas.³ La persistencia y la re-edición de formas depredatorias de los bienes comunes en las periferias del capitalismo mundial han llevado a replantear marcos teóricos al momento de describir la fase actual de dicho modo de producción. En esta línea, el conocido trabajo de David Harvey nos acerca a la perspectiva que considera que las formas de acumulación que Karl Marx llamaba *originarias* de hecho persisten en la actualidad, en paralelo a formas de *acumulación ampliada*. Por ende, nada tendrían aquellas de primitivas: la idea de una *acumulación por desposesión* apunta a un rol permanente de prácticas depredadoras, basadas en la violencia, para garantizar la acumulación de capital.

Con la llegada del neoliberalismo, esta forma de acumulación vuelve a tener un peso central, con ciertas especificidades:

[...] en este periodo la acumulación por desposesión abarca tanto procesos que se asemejan a aquellos descritos por Marx en *El Capital* como la

³ Estas actividades “*tienen una larga historia en nuestro continente iniciada con la sangrienta conquista española y portuguesa de Nuestra América y la apropiación del oro y la plata que nutrió la emergencia del capitalismo en Europa*” (SEOANE, 2013, p. 24)

destrucción y concentración de activos a través de la especulación financiera, la inflación y el crédito, el vaciamiento a través de fusiones, el endeudamiento que reduce a la servidumbre a poblaciones enteras o la apropiación privada de la tierra ahora a escala global. Pero también involucra nuevos mecanismos como la biopiratería y el pillaje de los recursos genéticos mundiales; la mercantilización y depredación de los bienes ambientales globales; la mercantilización de la cultura y la subjetividad; y la privatización de los activos públicos (SEOANE, 2013, p. 35)

Estas características económicas supieron mantenerse durante las décadas del nuevo siglo, incluso han acompañado a los llamados “gobiernos progresistas” de la región, como adelantábamos más arriba. Aunque el “neodesarrollismo”, como algunos autores le llaman, ha tenido como algunos de sus pilares económicos centrales, para salir del “subdesarrollo”, una mayor presencia estatal (o una matriz económica más Estado-céntrica), y la atención en procesos de industrialización y desarrollo de ciertas tecnologías, por el otro lado también mantiene una firme creencia en que el agronegocio y el extractivismo, con sus cuantiosas ganancias, pueden ser medios para lograr aquella tan mentada industrialización, así como confían en que la misma puede ser alcanzada gracias a los capitales trasnacionales, cuyas empresas radicadas en nuestros países lograrían reducir la brecha tecnológica existente entre centro y periferias (KATZ, 2016, p. 140-144). Este tipo de gobiernos, a pesar de un discurso cargado de elementos ligados a la soberanía y al desarrollo nacionales, no postula la necesidad de romper la dependencia de los diferentes imperialismos, sino que a menudo optan por alejarse de alguna potencia para cultivar relaciones de cercanía con otras.

Es decir, neodesarrollismo y extractivismo son, de hecho, un par no tan polar como se pensaría a simple vista. De hecho, sus profundos vínculos también han sido señalados por Gudynas (2011), quien los analiza a través de diez tesis acerca del extractivismo en tiempos progresistas. Gudynas plantea que los sectores extractivistas son uno de los pilares de las estrategias de desarrollo del progresismo, por lo cual este tipo de economía ha sido profundizada durante los gobiernos aludidos. Lo ha sido, en la medida en que el Estado también ha adquirido una mayor presencia, no sólo a través de reglamentaciones al extractivismo sino también con intervenciones ligadas a la propiedad estatal o mixta de las empresas dedicadas a la explotación de los bienes comunes.

Sin embargo, aun así el Estado no logra una presencia uniforme en todo su territorio, ni siquiera en los lugares donde el capital trasnacional sí llega con fines de explotación. Esto genera conflictos a nivel de las territorialidades, en lo que Gudynas llama una

“desterritorialización” en la cual el rol estatal de garantizar ciertos derechos ciudadanos deja de cumplirse. Esto agrava las tensiones territoriales, problemas que se ahondan al mantenerse los niveles de impacto ambiental de las actividades en cuestión, debido a que, después de todo, aunque las empresas puedan ser de propiedad estatal, actúan bajo la misma lógica capitalista de la competitividad y el deseo de aumento de la rentabilidad.

Así, *“en el neoextractivismo se mantienen, y en algunos casos, se han acentuado los impactos sociales y ambientales [y] las acciones [por parte de los Estados] para enfrentarlos y resolverlos todavía son inefectivas, y en ocasiones se han debilitado”* (GUDYNAS, 2011, p. 83). Sin embargo, la posibilidad de captar una porción algo mayor de las ganancias de estas actividades, por ejemplo por medios tributarios, confiere, en los discursos de los gobiernos progresistas, una cierta legitimidad, anclada en el uso que de esos ingresos se realizaba: un uso ligado a políticas focalizadas asistencialistas, que en donde lograban efectividad, permitían una reducción del descontento social (GUDYNAS, 2011, p. 77-89). Por ello, se elaboran discursos que colocan al extractivismo casi como un mal necesario, a través de una lógica que parece traslucir la idea de que “a los recursos hay que explotarlos”, para lograr sacar al país de la dependencia y el “subdesarrollo”. Sin embargo, el neodesarrollismo mantiene el papel subordinado de América Latina, al defender al extractivismo como una cuestión de competencia de nuestros países en el mercado mundial.

Entre el 2003 y el 2008, las actividades extractivas experimentan un crecimiento exponencial, acentuándose en años posteriores: esto ha sido caracterizado como “ofensiva extractivista” (SEOANE, 2013). Desde mediados de los años noventa, en respuesta al ajuste estructural que imponía el neoliberalismo que avanzó sobre nuestra región, se iniciaba un nuevo ciclo de movilización y protesta popular. Éste encontró en el extractivismo, una nueva razón de avivamiento, con lo cual ha sido notable el crecimiento en las últimas dos décadas de los conflictos que se han dado en llamar “socioambientales”.

Entre ellos se cuenta el movimiento mapuche que, en la provincia de Neuquén, se ha convertido en un símbolo de la lucha contra la contaminación y el saqueo de los bienes comunes, ligada a las industrias petrolera, forestal, turística, entre otras. Las resistencias del pueblo mapuche deben ser explicadas a partir de un repaso de lo que ha sido su proceso de politización, que en este espacio provincial ha llevado a la conformación de una organización supracomunal de gran visibilidad en los conflictos, la Confederación Mapuche de Neuquén. Esta organización, si bien nuclea solo una parte del pueblo mapuche, se ha convertido en un

actor central en los conflictos socioambientales de la provincia, y es un sujeto de peso dentro del caso que aquí estudiaremos (el del conflicto de la comunidad Campo Maripe, del departamento de Añelo).

El proceso de politización del pueblo mapuche en Neuquén

En el marco de la creciente movilización social surgida tras la década de 1960, válida para toda América Latina, en la provincia de Neuquén se producía el surgimiento de las primeras organizaciones políticas del pueblo mapuche. Tras un recorrido previo en el que organismos de la sociedad civil, como la Iglesia del padre Jaime de Nevaes, apuntalaran la creación de dichas organizaciones, a principios de los años setenta, se fundaba la Confederación Indígena Neuquina (CIN). Una experiencia de cerca de una década, atravesada por el involucramiento de un grupo de jóvenes mapuche en el seno de la organización, culminó su derrotero con la sanción de un nuevo estatuto, que clausuraba en la letra la época de una CIN tutelada por los poderes eclesiásticos y políticos de la provincia.

De este modo, se fundaba oficialmente a principios de los ochenta la *Confederación Mapuche de Neuquén*. La nueva etapa en organización etnopolítica no sólo se valió de un cambio de nomenclatura, sino que con el correr del tiempo, aquel grupo de jóvenes formados políticamente al calor de la década de los ochenta se fue consolidando y propiciando un recambio generacional en materia de referentes comunitarios.

La década de 1990 fue, para toda América Latina, un momento de aumento de la visibilidad de luchas de sectores subalternizados que venían alzando su voz, ligados a las reivindicaciones por reconocimiento de identidades que habían quedado excluidas en los procesos de configuración de los estados nacionales decimonónicos (TOLEDO LLANCAQUEO, 2005). Numerosos casos de modificación de marcos legales, como el reconocimiento a la preexistencia al Estado de los pueblos originarios en el texto de la Constitución Argentina, se alinearon con nuevas propuestas por parte de organismos internacionales de gran influencia, caso de la Organización Internacional del Trabajo – y su Convenio 169, al cual los diferentes Estados debieron ir adhiriendo con el correr de las siguientes dos décadas (GARCÍA SERRANO, 2001).

Quedaba reconocido, en la letra de la ley, un conjunto de derechos para los pueblos indígenas, y se abría de este modo un periodo de expectativa y reglamentación de los

mismos. Este segundo proceso, por su parte, probaría ser limitado. En el caso argentino, los cambios constitucionales con mayor potencial de ampliación de derechos para los pueblos indígenas se incluyeron entre las “Atribuciones del Congreso”, con lo cual su reglamentación quedó pendiente. La falta real de reconocimiento de una serie de derechos que parecían haberse consensuado incluso a nivel internacional se unió en nuestros lares a problemáticas ligadas al reparto de tierras.

La historia oral transmitida de generación en generación por el pueblo mapuche fija un punto de inflexión en las vejaciones producidas en el marco de la “Conquista” del “desierto”.⁴ El desplazamiento decimonónico de poblaciones indígenas hacia zonas que en ese momento se consideraban marginales, para la producción dentro del modelo agroexportador, provocó un desarraigo y desarticulación cultural de estos pueblos. Sin embargo, dentro de una nueva matriz productiva nacional (PERREN, 2007; SVAMPA, 2008), en la cual la provincia del Neuquén tiene un peso importante –por encontrarse aquí acumulación de recursos hidrocarburíferos— se desata una nueva lucha entre agentes estatales y agentes económicos, por un lado, y las organizaciones del pueblo mapuche, por la ocupación de tierras otrora marginales, hoy indispensables desde la óptica del Estado y sus agentes.

El partido político provincial hegemónico desde la década de 1960, el Movimiento Popular Neuquino (MPN), ha descripto líneas de acción en torno a las “problemáticas” indígenas que ilustran y complejizan lo planteado hasta aquí. La década de 1960 fue testigo de un conjunto de políticas favorables a una “integración” a la sociedad hegemónica, y de asistencialismo, como la creación de “Reservas Indígenas” en zonas de tierras fiscales, acorde al Decreto 0737/64, el cual otorga el beneficio a dieciocho de las “agrupaciones” (término utilizado para referirse a las comunidades) mapuche de la provincia.

Este beneficio se encuentra acompañado de una serie de obligaciones y de garantías, como es la construcción de viviendas para los mapuches en un término de cuatro años, o del acceso a la educación de los hijos de las familias beneficiadas. Sin embargo, no se trata del otorgamiento de la propiedad de las tierras, sino solo de su posesión. A través de los años, el Movimiento Popular Neuquino (MPN) ha tratado de reducir la problemática indígena al acceso y tenencia de la tierra, como en el caso de la ley 1759 de 1988, que insta al Estado a

⁴ Entrevista a Luisa Huencho, octubre de 2014, Neuquén capital.

mejorar el proceso de transferencia de tierras fiscales a las comunidades indígenas que “se ajusten a las normas legales vigentes”.

En el 2002, a lo anterior la provincia sumó el intento de reglamentar la Ley Nacional 23.302 mediante el Decreto 1184/02, creando un registro de comunidades indígenas paralelo al establecido por consecuencia de la nombrada ley nacional, que funcionaba como requisito para el reconocimiento legal de las comunidades. A través de la inscripción en aquel Registro Nacional, las comunidades se transformaban en interlocutoras válidas ante el Estado para realizar reclamos territoriales y ser beneficiarias de la transferencia de tierras; caso contrario, al no reconocerse su existencia, no se daría curso a las reivindicaciones. De forma que el Movimiento Popular Neuquino (MPN) deseaba superponer, a los requisitos de dicho Registro, otros adicionales, sumando como instancia obligatoria la inscripción en un registro paralelo a nivel provincial.⁵

Los procesos de politización del pueblo mapuche (VALVERDE, 2005) los han colocado como un actor social de peso propio en el campo político neuquino, en numerosas ocasiones enfrentándose a la política provincial asistencialista, tendiente a una integración sin real interculturalidad. La disputa por la ocupación de territorios ha sido, en los últimos años, una razón de visibilización y controversias (AYLWIN, 2004). Al mismo tiempo, el campo político mapuche elabora diferentes vertientes de discursos. Sugerimos que las diferencias discursivas dentro del pueblo mapuche se deben a procesos de construcción de subjetividades políticas que divergen según una serie de factores que se relacionan de forma compleja, entre los cuales la generación y la inserción en diferentes tramas vinculares políticas y la adhesión a diferentes líneas políticas provinciales o nacionales pueden referenciarse como claves.

Estos procesos de conformación de subjetividades políticas deben ser estudiados dentro de un marco temporal más amplio que el que presenta este trabajo. Sin embargo, un

⁵ La sanción del artículo 53 en la reformada Constitución Provincial del 2006, tampoco puede considerarse acriticamente como un hito del avance de los derechos de los pueblos indígenas de la provincia, puesto que “sostuvo en sus dos últimos periodos una dura política hacia los reclamos sobre la tierra, negándolos sistemáticamente, y no ha mostrado una política siquiera cercana a la interculturalidad”.⁵ Dicho artículo reza: “La Provincia reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas neuquinos como parte inescindible de la identidad e idiosincrasia provincial. Garantiza el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural. La Provincia reconocerá la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regulará la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, ni transmisible, ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurará su participación en la gestión de sus recursos naturales y demás intereses que los afecten, y promoverá acciones positivas a su favor”

punto de inflexión puede ser ubicado en la década de 1990, como sugerimos en otro trabajo (Aguirre, 2015), con el proceso de formación de los referentes que hoy se encuentran a la cabeza de la Confederación Mapuche de Neuquén. En particular, el conflicto librado en el departamento de Aluminé, que involucró en 1995 y 1996 a una serie de comunidades mapuche, al Estado provincial y a empresas madereras, dentro del territorio enmarcado dentro de la "Corporación Interestadual Pulmarí", implicó un cambio profundo en las prácticas políticas de parte del campo político mapuche.

Este conflicto llevó a la innovación en materia de tácticas y acciones colectivas, puesto que significó la implementación de acciones directas de un nuevo tipo: además de las ya utilizadas manifestaciones, bloqueos de caminos para la visibilización de los reclamos y mecanismos legales de interpelación al Estado, se llevan a cabo acciones que pueden entenderse como un ejercicio directo de los derechos por vías no institucionales. Estas acciones colectivas directas de nuevo cuño se ejemplifican en la ocupación por la fuerza de una serie de hectáreas reclamadas como propias en el departamento de Aluminé, que habían sido concesionadas a privados. Sin ahondar más en este caso, que no es el objeto de este trabajo, es necesario señalar que se produce a raíz del mismo una primera división entre comunidades que acuerdan con estas tácticas y otras que se manifiestan en desacuerdo.

Las primeras se alinean desde entonces con la Confederación Mapuche de Neuquén, y las segundas se encuentran en procesos de agrupamiento en paralelo a aquella organización. Entrada la primera década del siglo XXI, otras divergencias internas se harán patentes, frente a la adhesión de una parte de los líderes de la Confederación Mapuche de Neuquén a algunas líneas del proyecto político del kirchnerismo. La política petrolera del gobierno nacional, que redundó en el territorio neuquino en contaminación de los territorios, ha sido uno de los puntos en los que la Confederación Mapuche ha elevado críticas al gobierno provincial, e indirectamente al nacional. El rechazo a la experiencia política kirchnerista por parte de algunas comunidades del interior de la provincia que a raíz de ello deciden distanciarse de la Confederación, abre la puerta a la profundización de articulaciones políticas con otros sectores movilizados y organizados dentro del espectro de la izquierda política argentina. Volviendo a nuestro estudio de caso, para la comunidad Campo Maripe, el apoyo de la Confederación es decisivo.

La comunidad Campo Maripe: entre el Relevamiento y el reconocimiento

Los conflictos por el reconocimiento del lof Campo Maripe pasan a primer plano en materia de cobertura mediática en el año 2013. La firma de un pacto entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF, empresa de capital mixto) y Chevron (petrolera estadounidense) para la producción de hidrocarburos por métodos no convencionales en la provincia de Neuquén, a mediados de aquel año, obró de antecedente inmediato para la salida a la luz pública de reclamos cruzados acerca de la ocupación y propiedad de territorios localizados en el Departamento de Añelo, en lo que se conoce como Loma Campana, en el corazón de la formación geológica denominada "Vaca Muerta".

Desde el mes de mayo, la comunidad emprendía reclamos formales hacia YPF por el avance de las obras petroleras en Añelo.⁶ En julio del 2013, un actor privado inicia acciones legales contra el *logko* (cabeza) de la comunidad, con una acusación de usurpación de territorio.⁷ Se inicia así un ciclo de intentos de desalojo por la fuerza, de resistencia y diversas acciones colectivas por parte de la Comunidad.

En un primer momento, los reclamos se enmarcaron dentro del pedido de que el Estado realice una consulta previa al establecimiento de las explotaciones petroleras. Para ello, la Confederación Mapuche de Neuquén se afirmó en el Convenio 169 de la OIT, y desarrolló un curso de acción con tácticas diversas en paralelo. Por un lado, presentaría una impugnación al acuerdo entre la petrolera YPF y la norteamericana Chevron. Por el otro, realizaría una movilización en la localidad de Añelo, y como medida de fuerza, la ocupación de cuatro pozos petroleros. Esta ocupación cesó al recibir una promesa de diálogo por parte de YPF.⁸ La brevedad de la medida de fuerza parece indicar que la táctica utilizada por la comunidad Campo Maripe se basa en la apertura de canales de diálogo en este caso con la empresa mixta pero también con el Estado, en obturación de los cuales se opta por acciones

⁶ Diario *Río Negro*, "Gobierno: 'no existen datos objetivos'", disponible en: http://www.rionegro.com.ar/region/gobierno-no-existen-datos-objetivos-BBRN_7875302 acceso en 04/08/2015

⁷ Esta denuncia sería posteriormente archivada en noviembre de 2015: Indymedia, "Una buena para el Lof Campo Maripe: ordenan archivar denuncia por usurpación", disponible en: <http://argentina.indymedia.org/news/2015/11/883727.php> acceso en: 17/11/2015

⁸ Diario *Río Negro*, "Mapuches anuncian que cerrarán el paso a Chevron", disponible en: http://www.rionegro.com.ar/portada/mapuches-anuncian-que-cerraran-el-paso-a-chev-XORN_1205207; acceso "Protesta mapuche" y "Mapuches levantaron la protesta de Loma Campana", disponible en: http://www.rionegro.com.ar/argentina/protesta-mapuche-MORN_1208655 acceso en 11/07/13 y http://www.rionegro.com.ar/region/mapuches-levantaron-la-protesta-en-loma-campa-HORN_1209231 acceso en 16/07/13.

colectivas directas de protesta que impliquen un costo a pagar por la contraparte (aquí, el no acceso a los pozos petroleros, con el costo de suspensión de la producción).

La comunidad Campo Maripe se encuentra respaldada por la Confederación Mapuche de Neuquén en sus reclamos. Como adelantáramos más arriba, esta organización supracomunal nuclea referentes políticos formados al calor de la década de 1990, con subjetividades políticas que entreveran, a nivel de tácticas de lucha, varias vías de acción. Los métodos más institucionales, que ya se contaban entre el repertorio de acciones seguidas por organismos anteriores a la Confederación Mapuche de Neuquén, se complementan, en esta generación de referentes, con algunas medidas radicalizadas, como acciones directas. De esta forma, se multiplican, desde 1996, los ejemplos de ocupación de terrenos reclamados como propios, los bloqueos permanentes y prolongados en el tiempo, y otras acciones colectivas. Tanto la prensa como una de las facciones dentro del propio campo político mapuche han realizado una intensa campaña de deslegitimación de dichas acciones, por medio de su caracterización como “violentas” e “injustificadas” (AGUIRRE, 2016).

El diálogo pasa nuevamente a un segundo plano tras un evento de violencia contra la comunidad, en el cual se atacó y destruyó propiedad comunal, teniendo como respuesta la organización de un bloqueo a la entrada del yacimiento de Loma Campana. Esta acción colectiva permite observar otro aspecto central de las tácticas empleadas por la Confederación: la articulación con sectores no mapuche movilizados. De hecho, la medida en cuestión contó con el apoyo de varios gremios (de trabajadores, estudiantiles) y sectores de la sociedad, a lo cual se sumó la presencia efectiva de representantes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), de la Pastoral Social del Obispado de Neuquén y del espacio de coordinación inter-fuerzas denominado “Multisectorial contra la Hidrofractura”. Una vez más, esta acción colectiva cesó ante la llegada de una respuesta por parte de los agentes estatales: la toma de una denuncia penal para la investigación de los hechos de violencia por los cuales se realizaba el reclamo.

A pesar de que el reclamo por el reconocimiento territorial de la comunidad se realizaba por una extensión de once mil hectáreas, finalizando el 2013, el Estado decide crear, a modo de reserva, una concesión de 63,8 hectáreas para explotación productiva familiar para la comunidad. Los reclamos no aminoran: se continúa exigiendo el retiro de las empresas petroleras hasta la realización de una “consulta previa” a la comunidad, a lo cual, para el segundo semestre de 2014 se suma el pedido del reconocimiento de la Personería Jurídica de

la comunidad, y múltiples denuncias por pérdidas de gas y derrames de petróleo. En este marco se dan las acciones quizás más difundidas emprendidas por la comunidad: el encadenamiento de militantes de organizaciones mapuche a las torres petroleras de YPF en el yacimiento de Loma Campana, impidiendo la producción.⁹

Tras episodios de acusaciones cruzadas y quiebre del diálogo por parte del gobierno provincial, esta acción colectiva logra el compromiso de reconocimiento de la Personería Jurídica de la comunidad. Sin embargo, el Estado incumple los plazos para dicha operación, gestándose así otro ciclo de protestas y acciones del pueblo mapuche, que resulta en el otorgamiento de lo acordado, aunque desligado del reconocimiento de la ocupación ancestral de las tierras. Sugeríamos anteriormente que las relaciones con el Estado y los agentes económicos tampoco pasa, en este conflicto, exclusivamente por el conflicto abierto. Ejemplo de ello es el involucramiento de YPF en proyectos de siembra de tierras destinadas a la comunidad para su producción familiar, o su venta. En el marco de un programa de "responsabilidad empresaria", la petrolera realiza obras, por ejemplo de irrigación para campos de siembra, de un conjunto amplio de hectáreas, entre las que se cuentan las apartadas como "reserva" para el lof Campo Maripe.¹⁰

Tras el otorgamiento de la personería jurídica, la comunidad se avocó a un reclamo enmarcado en la Ley Nacional 26.160, y en su Programa Nacional Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas (ambas, medidas del gobierno nacional kirchnerista). Ésta ordenaba el cese de los desalojos de pueblos originarios hasta tanto se completaran los procesos de relevamiento territorial para comprobar las ocupaciones ancestrales que diferentes comunidades del país esgrimen para demandar su reconocimiento como legítimos habitantes de sus tierras. El Relevamiento se pactó para ser realizado en un periodo que posteriormente se dilató, provocando el descontento de la comunidad, que una vez más se colocó a la cabeza de acciones colectivas que visibilizaran este nuevo incumplimiento de los acuerdos con el Estado provincial.

"Antes de que se asentara YPF ya estaba el conflicto por las tierras [...] Acá la comunidad no está totalmente para parar y sacar a las petroleras, sino la comunidad esta para que el gobierno se siente a dialogar sobre el relevamiento con la comunidad"

⁹ Diario *Río Negro*, "Comunidad mapuche bloquea tres accesos al yacimiento Loma Campana", disponible en: http://www.rionegro.com.ar/region/comunidad-mapuche-bloquea-tres-accesos-al-yac-BORN_4723389, acceso en: 09/10/14

¹⁰ Diario *Río Negro*, "Entente cordiale por tres" disponible en: <http://www.rionegro.com.ar/energia/entente-cordiale-por-tres-JRRN_7756844>. , acceso en: 04/07/15

Campo Maripe para llegar a algún acuerdo porque realmente están destrozando todo nuestro territorio donde estamos. Tenemos animales, por eso el relevamiento se hizo con el derecho, viendo todo, antropólogos, todo el equipamiento para poder ver qué es lo que nosotros estábamos reclamando” (Logko de Campo Maripe, Albino Campo, información verbal)¹¹

A mediados del 2015, finalmente se dio a conocer el resultado del Informe Histórico-Antropológico, parte del Relevamiento territorial, que señalaba una presencia probada de antecesores de la actual comunidad Campo Maripe en la zona reclamada (11.000 hectáreas, su mayoría sobre la meseta) desde la década de 1920. El Estado provincial adoptó la postura de no reconocer como datos “objetivos”¹² los presentados por el Informe, descartando la posibilidad de reconocer propiedad de las tierras al Lof. El gobernador declaró a la prensa: *“no hay derechos ancestrales, sino un señor que vino de Chile, pidió un pastoreo en el año 40, reconociendo que eran intrusos, que las tierras eran de Nación”*.¹³ De modo que, aunque con Relevamiento, la comunidad persiste en una condición carente de reconocimiento.

Campo Maripe en el Informe Histórico-Antropológico

El Informe publicado en 2015, a cargo de un grupo interdisciplinar entre quienes se cuentan especialistas de la Universidad Nacional del Comahue, integrado también por especialistas designados por el Estado, realiza un relato basado en fuentes oficiales y entrevistas orales para reconstruir precedentes ocupaciones del territorio en disputa. Se inicia un recorrido desde el punto de inflexión histórico que fue la “Campaña del Desierto”, con las medidas que el Estado Nacional en consolidación llevó a cabo para despoblar el territorio e iniciar los procesos de construcción de presencia estatal en el mismo.

En este contexto de fines del siglo XIX, se señala que familias del pueblo originario mapuche convivían dentro de un territorio ancestral que abarcaba ambos márgenes de la Cordillera de los Andes, iniciándose procesos de migración y huida de un lado al otro debido

¹¹ Fragmento de entrevista realizada y emitida por Radio Urbana, en el programa “A fondo”, acceso en: 06 de agosto de 2015.

¹² Diario *Río Negro*, “Sapag desacreditó el informe de los Campo Maripe” disponible en: http://www.rionegro.com.ar/region/sapag-desacredito-el-informe-de-los-campo-mar-XBRN_7880778, acceso en: 06/08/15.

¹³ Diario *Río Negro*, “Observatorio cuestiona al gobernador”, disponible en: http://www.rionegro.com.ar/region/observatorio-cuestiona-al-gobernador-MBRN_7882352, acceso en: 08/08/15

a las medidas violentas tanto del Estado argentino como del chileno para lograr el control del “desierto” y la Araucanía, respectivamente.

[Las familias] fueron expulsadas de sus territorios tradicionales, obligadas a dispersarse o instalarse en espacios reducidos. Además de ello, una política estatal de imposición cultural y económica llevó al menos a dos generaciones de mapuce a abandonar o invisibilizar su identidad y sus propios modos de vida (IHA, 2015, p. 21)¹⁴

Antes de la década de 1920, el Informe ubica a los antecesores de la comunidad residiendo en Chile, lugar del cual se ven forzados a migrar, en el marco de las políticas estatales de confinamiento en reducciones y persecución, situando su destino al otro lado de la Cordillera. El informe hace alusión a documentación que prueba su radicación en 1927 en “Fortín Vanguardia”, el nombre con que se designaba la zona hoy conocida como “Loma Campana”: a partir de 1941 se inicia el pago de derechos de pastaje, y el Estado cobra una deuda de pastaje calculada desde 1927 (IHA, 2015: p. 23).

A lo largo de las décadas siguientes, los antecesores de la comunidad no se conforman con ser declarados “ocupantes” del territorio sino que manifiestan al Estado el interés por comprar las tierras habitadas, pedidos sistemáticamente denegados por los agentes estatales. Aun reconociendo que las tierras se encontraban habitadas, son finalmente cedidas en concesión y vendidas a agentes privados. La ocupación real del espacio por parte de las familias mapuche se prolonga, y en el año 1964 son reconocidos como “arrendatarios” de cerca de seis mil hectáreas, aunque en la década de 1970 se le adjudica parte del territorio habitado por las familias a un agente privado, que inicia acciones que finalizan en intimaciones para el desalojo.

El informe relata que el privado en cuestión toma a la familia como trabajadores en su propiedad, previa demolición de la vivienda familiar. El desalojo forzó el traslado de los ganados hacia el Cerro Morado, espacio del cual la familia intenta adquirir por medios legales diez mil hectáreas en 1980, siendo su solicitud denegada. Parte de estas tierras serán finalmente adjudicadas, en 1983, a otro propietario privado. Luego de 1995, la familia aspira a volver a los territorios ocupados entre las décadas de 1920 y 1950. Es interesante notar que se trata de la misma época en la que se produce un reordenamiento del campo político mapuche a nivel provincial, con una renovación generacional de los líderes de la

¹⁴ Informe Histórico Antropológico (de aquí en más “IHA”), a cargo de Lic. Jorgelina Villarreal, Relevamiento Territorial Lof Campo Maripe, Provincia de Neuquén, 2015.

Confederación Mapuche, y la irrupción de nuevas acciones colectivas. Parte de la familia nunca abandona el territorio en cuestión, según relata el informe, dedicándose al pastoreo, hasta el año 2000, en que hubo un retiro a otra zona (Bardas Blancas), debido a la destrucción de la vivienda familiar.

En 2011, un núcleo de la familia decide volver a ocupar los territorios habitados originalmente, acción de la cual existe documentación policial (IHA, 2015: 36). Es en este año que se anuncia el descubrimiento de hidrocarburos no convencionales en la zona bautizada como "Loma Campana", cuestión a la que más tarde se sumó el ya mencionado pacto entre YPF y Chevron para darle una explotación a dichos recursos por medio de la hidrofractura.

La comunidad frente a esta nueva realidad que amenazaba otra vez sus posibilidades de proyección, decide organizarse y contactarse con otros movimientos sociales que ya en ese momento estaban manifestando posturas contrarias a esta realidad. Es a partir de estas articulaciones, que el Lof toma conocimiento de los derechos que los asisten como pueblo originario, situación que es una condición necesaria para saberse "sujeto de derecho". Es a partir de esto que se contactan con la Confederación Mapuce Neuquina –organización política del Pueblo Mapuce en Neuquén- e inician el proceso de conformación como comunidad (IHA, 2015, p. 38).

Como ya hemos reseñado, desde 2013 se realizan una serie de acciones colectivas directas, que culminan en el otorgamiento de la Personería Jurídica, con la firma por parte de la comunidad de un "Acta Acuerdo de Paz Social" (IHA, 2015: p. 38) que da origen al Informe Histórico Antropológico. Este otorgamiento, como ya hemos dicho, significó la finalización del Relevamiento Territorial, aunque no el reconocimiento del derecho sobre las tierras por parte del Estado provincial.

A modo de cierre: algunas reflexiones provisorias

El modelo extractivista que se ha desplegado en Argentina, y la particular configuración hidrocarburífera que ha adoptado en la Provincia de Neuquén, generan efectos sobre los entramados de poder socio-político. Las características de las relaciones de poder tejidas en la provincia demuestran estar profundamente atravesadas por las acciones de diferentes agentes, entre los cuales el papel del movimiento mapuche no puede ser desdeñado.

El análisis de este modelo económico en toda América Latina necesita de una perspectiva más amplia que lo local, que puede sintetizarse en la observancia de cuatro

procesos (SEOANE, 2013: p. 26-27). Por un lado, en la fase actual del capitalismo neoliberal existe una forma de *acumulación basada en el despojo* por medios violentos de los bienes naturales, carnalmente relacionado con el nuevo orden internacional que establece una división del trabajo internacional en la cual los países dependientes, dentro del entramado del imperialismo, se ven envueltos en procesos de desindustrialización y reprimarización económica. Esto configuró para América Latina un escenario de *nueva dependencia*, de un carácter neocolonial, fruto de la cual se reproduce una economía con enclaves productivos controlados por el capital internacional, a veces en sociedad con empresas estatales o de capital mixto.

El avance neoliberal se tiñe, en este siglo, de cierta especificidad, al ir acompañado de la llamada tercera revolución científico-tecnológica, que ha abierto, especialmente a través de la biotecnología, la posibilidad de un profundo proceso de *mercantilización de la naturaleza* y por ende los bienes comunes. Esto se da dentro del panorama de una crisis que ha llegado a ser entendida como una *crisis de la civilización dominante* por diversos estudiosos como Edgardo Lander (citado en SEOANE, 2013: p. 27). En particular, además de su costado económico, alimentario y climático, esta crisis tiene una faceta energética que, acompañada por la subida en los precios internacionales de los hidrocarburos, significó para nuestra región (y otras zonas de la periferia capitalista mundial) convertirse en el centro de disputas internacionales de carácter geo-estratégico. En el caso argentino, los gobiernos nacionales se han balanceado sucesivamente entre el tejido de relaciones con China y Rusia durante la década pasada, y más recientemente desde el cambio de gestión presidencial, con Estados Unidos en desmedro de las anteriores.

El caso de Venezuela, país cuya economía depende casi exclusivamente de la exportación de hidrocarburos, es llamativo dentro del panorama latinoamericano. La provincia de Neuquén es, a una escala diferente, otro caso atravesado por aquellos cuatro procesos. En ella, un movimiento político hegemónico dentro de la política desde la década de 1960 recurre a una serie de estrategias para conservar los resortes del poder político. Entre ellas, la de haberse colocado como un Estado empleador, por los numerosos puestos laborales en administración o dependencias públicas que la provincia ofrece, que actualmente encarnan la mayoría de las ofertas dentro del mercado laboral. Para el mantenimiento de dichas estrategias, el peso de las regalías hidrocarburíferas que obtiene la provincia es central.

La segunda gran especificidad del caso neuquino recae en la fuerte presencia en el campo político de las organizaciones mapuche, que logran con asiduidad cierta gravitación en el entramado de poder que tiene al Estado (provincial y nacional) y a los agentes económicos (nacionales e internacionales) como actores principales. Los reclamos territoriales propios de este pueblo se entrelazan con conflictos que atañen a espacios de la sociedad más amplios, como son la problemática de la depredación de los bienes naturales, teñida en territorios petroleros y gasíferos de la contaminación reiteradas veces denunciada por organizaciones mapuche y no mapuche.

El pueblo mapuche ha sido, desde mediados de la década de 1990, uno de los principales actores movilizados de la provincia. Toda esta década estuvo marcada en Argentina por la emergencia de nuevos métodos y formas de protesta social. El "piquete", es decir, la interrupción del tránsito de rutas importantes o puentes de acceso a ciudades, fue quizás el método más novedoso de la época. El estado de permanente deliberación y organización de los sectores en procesos de reivindicación acompañó a los llamados piquetes. El pueblo mapuche no fue ajeno a esta redefinición de las tácticas de lucha. Tomó herramientas del campo político argentino y las adaptó a su realidad, conformando un repertorio de acciones colectivas variadas, que nunca se dejó de combinar con acciones formales (como las instancias de diálogo con autoridades, o las propias instancias legales en diferentes disputas).

El corte de rutas y la ocupación de lugares estratégicos han sido, junto con las tradicionales manifestaciones o movilizaciones en las calles, las herramientas más usadas. En algunos casos, las medidas se han extendido considerablemente en el tiempo. Como ejemplo para la zona de la que trata este artículo, podemos citar el ejemplo del grupo de mujeres de la comunidad Campo Maripe que ocuparon una planta del yacimiento y se encadenaron a las torres petroleras para impedir el trabajo de los operarios en el yacimiento Loma La Lata.³⁵

Hemos realizado aquí una primera aproximación a aquel caso en particular, el de las disputas que la comunidad Campo Maripe ha mantenido en esta década con el Estado provincial y empresas petroleras, especialmente con Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Nos preguntábamos por las tácticas en la acción política de la comunidad, y de la Confederación

³⁵ Ver anexo n°2 para una imagen proveniente de los medios de comunicación que cubrieron el episodio.

Mapuche de Neuquén, organización supracomunal que ha acompañado al lof en sus reclamos y acciones colectivas.

Del análisis de la trayectoria histórica de las familias que componen la comunidad, proceso reseñado por el Informe Histórico Antropológico parte del Relevamiento Territorial, se desprenden algunos puntos relevantes. En primer lugar, que durante las primeras décadas de ocupación del territorio, no parecen evidenciarse métodos de acción organizada. Las tácticas ligadas a la ocupación de los espacios se asocian a iniciativas individuales, como los intentos por parte de diferentes miembros de la familia ya sea de comprar los terrenos, como de pagar el derecho al pastaje, o la búsqueda de tornarse “arrendatarios”, colocándose bajo algún parámetro legal de ocupación.

De hecho, la identidad mapuche tampoco aparece como un dato relevante para las familias en cuestión. El informe adjudica la invisibilización de la identidad étnica a las políticas estatales nacidas a fines del siglo XIX. La histórica violencia multidimensional de la que fue – y en cierta medida aún es— objeto el pueblo mapuche contribuye a explicar un proceso de desasimio de la identidad étnica, que se rompe, según nuestra visión, con la generación de referentes formados políticamente en la década de 1990. La eclosión o el resurgimiento de movimientos sociales anti-neoliberales que marcó esta década en toda América Latina sin duda encontró una expresión en la provincia de Neuquén, en el auto-reconocimiento del pueblo mapuche como tal.

Dentro del proceso de estructuración de organizaciones políticas mapuche, que inicia con anterioridad a dicha década, nuevas organizaciones llenan de un contenido diferente los reclamos y acciones colectivas, especialmente desde los años 1995-1996 (conflicto con la Corporación Interestadual Pulmarí). Resulta llamativo que el Informe Histórico Antropológico ubique en esos mismos años el inicio del proceso de re-apropiación de las tierras ocupadas a principio de siglo, de las cuales los Campo habían sido despojados, y de la voluntad de organización, que se materializa cerca de dos décadas más tarde, cuando la familia que compone la comunidad tome contacto con la Confederación Mapuche, concretando su conformación como Lof, e iniciando el reclamo por el otorgamiento de Personería Jurídica.

Hecho el contacto con la organización supracomunal, se aceleran las acciones reivindicativas, y se diversifican las tácticas políticas. Se busca, en ausencia de negociaciones, el ejercicio de presión para destrabar el diálogo con el Estado y con los agentes económicos

involucrados. Es decir, existe una dualidad entre tácticas ligadas al intento de acuerdos, por un lado, y abocadas, por el otro, a acciones colectivas directas no institucionales, como el encadenamiento a las torres petroleras llevada a cabo por las militantes mapuche en 2014 durante días. Esta dualidad es característica de las acciones colectivas de la generación mapuche formada durante la década de 1990 (Aguirre, 2015).

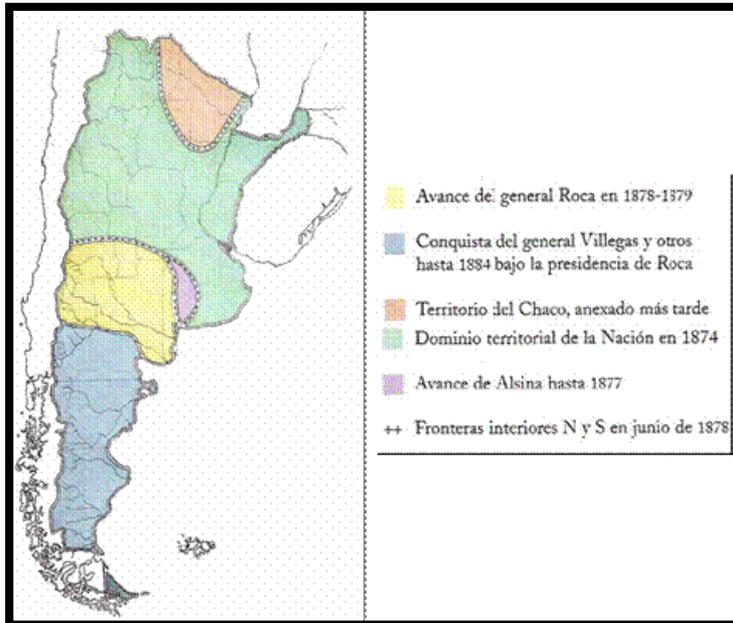
El caso de la comunidad Campo Maripe adquirió durante los últimos años una gran difusión mediática que cubrió el pulso de las acciones colectivas. El peso propio de las organizaciones mapuche dentro del campo político neuquino se ha vuelto un hecho innegable de un tiempo a esta parte. Este peso político se encuentra teñido de las tácticas políticas escogidas por la Confederación Mapuche de Neuquén, cuyos referentes han emprendido acciones colectivas directas de nuevo cuño en comparación con las aplicadas con anterioridad a la década de 1990, en combinación con el intento de diálogo con los agentes económicos y estatales. Los horizontes de la lucha del pueblo mapuche no se agotan en los reclamos territoriales, sino que la territorialidad es una base sobre la cual se articulan una serie de reclamos que en numerosas oportunidades llevan a las organizaciones mapuches a crear vínculos con otras, no mapuches. Esto le confiere no solo una mayor efectividad a la presión ejercida sobre agentes estatales y económicos, sino mayor legitimidad frente a los sectores politizados (desde el espectro kirchnerista hasta el de la izquierda política) de la sociedad "blanca". De la amplitud y las múltiples dimensiones de aquella lucha son expresión las palabras del *logko* Albino Campo, que utilizaremos a modo de cierre:

"Cualquier tipo que tiene un puestito de tortas fritas tiene que pagar un impuesto. Las multinacionales no pagan ni un impuesto y se llevan millones de dólares de la provincia, cuando nosotros acá en Añelo no tenemos ni un hospital. No tenemos nada, tenemos que viajar, llevar a Neuquén. Se llenan la boca "Vaca Muerta" y "petroleras" todo de acá, Añelo, cuando nosotros no tenemos nada, solamente ¿sabés lo que ha traído acá la petrolera? Pura prostitución y drogas. Eso es lo que estamos viviendo acá en Añelo" (Información verbal).¹⁶

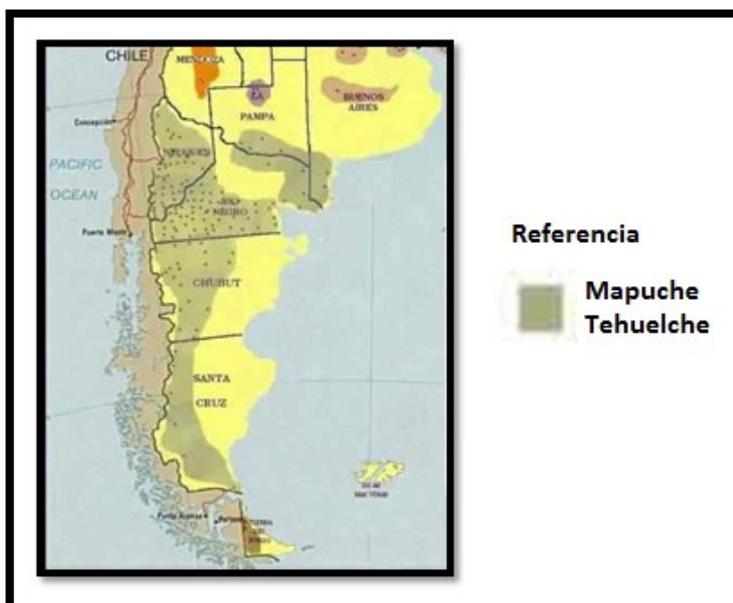
¹⁶ Fragmento de entrevista realizada y emitida por Radio Urbana, en el programa "A fondo", acceso en: 06 de agosto de 2015.

Anexo 1

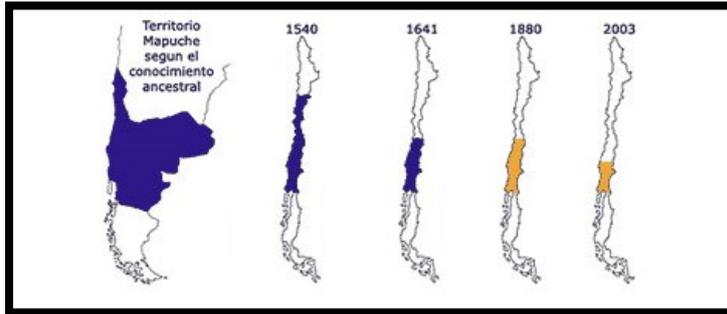
a), b), c) y d) Mapas del desarrollo histórico del corrimiento de la frontera de la sociedad blanca.



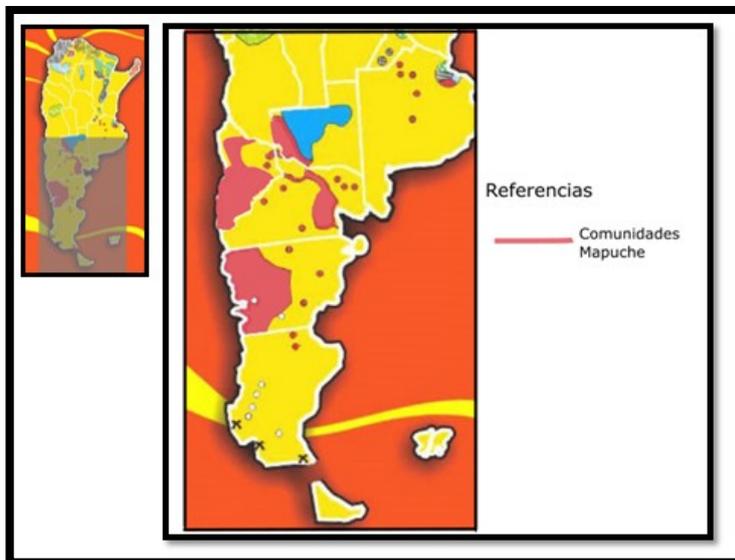
a) Mapa ilustrativo de las sucesivas campañas militares emprendidas por el Estado argentino a territorios indígenas. Fuente: Laura Oliva Gerstner, "La línea de frontera entre "bárbaros" y "civilizados" en la Argentina del siglo XIX: el caso de la Zanja de Alsina. Una visión desde Google Earth y el aporte de los museos virtuales", en *Aracne (Revista electrónica de recursos en Internet sobre geografía y ciencias sociales)*, Universidad de Barcelona. N° 138, octubre de 2010.



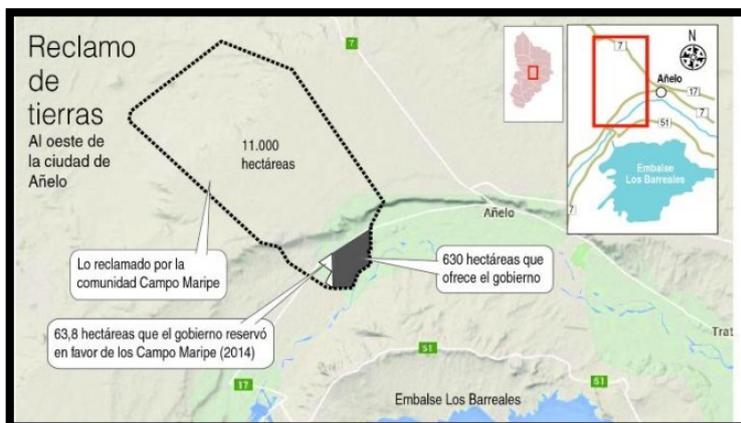
b) Mapa de ubicación aproximada de los pueblos originarios en Argentina, siglo XIX. Nótese "mapuches y tehuelches". En la actualidad, el pueblo mapuche señala que el "tehuelche" es en realidad una identidad territorial que forma parte del pueblo mapuche, y no un pueblo originario diferente. Fuente: Instituto Malvinas. Disponible en el sitio web: http://www.institutomalvinas.4t.com/patagonia/aborigenes/indigenas_siglo_xix.htm



c) Ubicación (Argentina y Chile) del territorio mapuche ancestralmente ocupado. Proceso de pérdida de la ocupación efectiva del territorio en Chile. Fuente: Observatorio de los Derechos de los Pueblos Indígenas y campesinos.



d) Ubicación aproximada del pueblo mapuche dentro de Argentina al presente. Fuente: elaboración propia a partir de información del Observatorio de los Derechos de los Pueblos Indígenas y campesinos.



e) Mapa de ubicación aproximada de la comunidad Campo Maripe, en la provincia de Neuquén. Fuente: Informe Histórico Antropológico, a cargo de Lic. Jorgelina Villarreal, Relevamiento Territorial Lof Campo Maripe, Provincia de Neuquén, 2015.

Anexo 2



a) Fotografía: mujeres de la comunidad Campo Maripe, encadenadas a la torre del yacimiento Loma La Lata (2014). Fuente: Diario Río Negro.

Referencias

Aguirre, S. (2015). **Cambios y permanencias en el campo político mapuche: el caso de los liderazgos en el 'Conflicto Pulmarí'**. Ponencia presentada en las Decimoquintas Jornadas Interescuelas de Departamentos de Historia. Comodoro Rivadavia: septiembre de 2015.

Aguirre, S. (2016). **La representación violenta de reivindicaciones territoriales y acciones colectivas: claves para el análisis de los discursos del pueblo mapuche y de la prensa nacional (1995-2015)**. *Conflicto social* N° 15, pp. 12-40. Buenos Aires.

Aylwin, J. (2004). **Políticas públicas y pueblos indígenas: el caso de las tierras mapuche en Neuquén (Argentina) y la Araucanía (Chile)**. Ponencia presentada a taller de la Red Indígena de CLASPO "Pueblos indígenas ante el estado neoliberal en América Latina". La Paz: julio de 2004.

Bilder, E. y Giuliani, A. (2009). **La Economía Política de la Provincia de Neuquén (1983-2008)**. Ponencia presentada en las XII Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia. San Carlos de Bariloche.

García Serrano, F. (2001). **Política, Estado y diversidad cultural. La cuestión indígena en la región andina**. *Nueva Sociedad* (173), pp. 94-103.

Gudynas, E. (2011). **El Nuevo Extractivismo Progresista En América Del Sur. Tesis Sobre Un Viejo Problema Bajo Nuevas Expresiones**. En AA.VV. *Colonialismos del siglo XXI. Negocios extractivos y defensa del territorio en América Latina*. Barcelona: Icaria.

Gudynas, E. (2013). "Extracciones, extractivismos y extrahecciones", en *Observatorio del desarrollo* N°18. Montevideo: CLAES.

luorno, G. (2000). **La historia política en Neuquén. Poder y familias libanesas. Neuquén: CLACSO-CEHEPYC**. Recuperado de <http://biblioteca.clacso.edu.ar/Argentina/cehepyc-uncoma/20110426124434/luorno.pdf>

Katz, C. (2016) **Neoliberalismo, neodesarrollismo, socialismo**. Buenos Aires: Batalla de Ideas.

Perren, J. (2007). **Érase una vez en la Patagonia - Luces y sombras de la economía neuquina (1958-1991)** en: Observatorio de la Economía de la Patagonia, disponible versión digital on-line en: <http://www.eumed.net/oe-pat/>

Seoane, J. (2013). **Modelo extractivo y acumulación por despojo**. En Seoane, J., Taddei, E. y Algranati, C. *Extractivismo, despojo y crisis climática*. Buenos Aires: Herramienta, El Colectivo.

Svampa, M. (2008). **Cambio de época. Movimientos sociales y poder político**. Buenos Aires: Siglo XXI.

Svampa, M. (2011). **Extractivismo neodesarrollista, gobiernos y movimientos sociales en América Latina**. *Revista: Problèmes de l'Amérique Latine* 81, p. 103-128.

Toledo Llancaqueo, V. (2005). **Políticas indígenas y derechos territoriales en América Latina: 1990-2004. ¿Las fronteras indígenas de la globalización?** En Dávalos, P. (Comp.). *Pueblos indígenas, Estado y democracia*. Buenos Aires: CLACSO, p. 67-102.

Valverde, S. (2005). **La historia de las organizaciones etnopolíticas del pueblo mapuche**. *Revista de Historia* (10), pp. 167-184. Neuquén: Universidad Nacional del Comahue.

Fuentes

- Informe Histórico Antropológico, a cargo de Lic. Jorgelina Villarreal, Relevamiento Territorial Lof Campo Maripe, Provincia de Neuquén, 2015.
- Diario *Río Negro*, ediciones del 2013 al 2015.
- Entrevista a Albino Campo, emitida por Radio Urbana (programa "A fondo"), 6 de agosto de 2015.
- Entrevista a Luisa Huencho, octubre de 2014, Neuquén capital.

Resumo

As relações entre agrupamentos mapuche e o Estado podem passar por três pontos: a colaboração, o diálogo ou a confrontação. O tipo de possível relação na marca de um reclame é afetado por fatores, entre os quais: as políticas econômicas são levadas a cabo em um território junto com a forma em que estas afetem a territorialidade indígena e os processos de politização característicos das comunidades. No município de Neuquén, o desenvolvimento da atividade hidrocarburífera marca o pulso de certos conflitos sociais, como neste caso com o povo mapuche. Foram transferidas numerosas comunidades desde o século XIX através da agência do Estado para terras que não eram de valor grato em certa junta histórica, mas que no século XXI são de importância estratégica pela política de energia do país e do município. Nos conflitos diversos, por diferentes bens comuns, excedendo o petróleo e o gás, o povo mapuche cruzou processos de auto-reconhecimento, organização e reagrupamento que insinuam alinhamentos com os governos provincianos ou nacionais em alguns casos, divisões internas, e em outros momentos, a rejeição para a colaboração com os agentes estatais. Nosso objetivo é analisar as variáveis diferentes que cruzaram o conflito específico da comunidade Campo Maripe com o Estado provinciano, situado no interior do Neuquén, na formação de Vaca Muerta (vaca morta), por testemunhos orais e fontes escritas (documentos elaborados pelas partes envolvidas e material da imprensa escrita).

Palavras-chave: Povo mapuche. Economía do petróleo. Territorialidade. Ações coletivas.

Mapuche people, state, economy and land. A conflict in Vaca muerta: Neuquen (Argentina), 2010-2015

Abstract

Interactions between mapuche organizations and the State of Neuquen Province can be based either on collaboration, dialogue, or confrontation. The possible kind of interaction in the midst of a conflict is affected by different factors, such as the economic decisions a government can make, the way in which those decisions can distress the territory and the people living in it, and the given process of political organization of, in this case, the indigenous people. In Neuquen Province, the development of oil and oil related activities has caused social conflict, involving specially the mapuche people. Numerous indigenous communities have been forced to move around, by the national State, since the nineteenth century, from lands required for agriculture and farming. In the twenty-first century, lands the mapuche people were moved to, are found to be strategical when it comes to oil industry, thus crucial both for National and Provincial States. The Mapuche people have formed political organizations, some of which have had some agreements either to Provincial or National states, generating internal divisions related to those agreements. In this paper, we will analyze different variables related to the conflict between Campo Maripe community and the State of Neuquen Province. The mentioned community is located in the heart of geological formation Vaca Muerta.

Key words: Mapuche People. Oil economy. Indigenous land. Collective actions.